

## *Crónica*



RELACION DE SENTENCIAS  
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
PUBLICADAS DESDE ENERO  
HASTA ABRIL DE 1987

LUIS AGUIAR DE LUQUE

(con la colaboración de FERNANDO REY)

Sentencia núm. 1/87, de 14 de enero (núm. Reg. 901/85), «BOE» núm. 35.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Distrito.

**Precepto de referencia:** Artículo 24.1 CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e incongruencia de sentencias.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 14/1985, de 6 de febrero; 90/1985, de 22 de julio; 109/1985, de 8 de octubre, y 77/1986, de 12 de junio.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 2/87, de 21 de enero (núms. Reg. 940 y 949/85), «BOE» número 35.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Acuerdo sancionador de la Junta de Régimen y Administración de una Prisión.

**Preceptos de referencia:** Artículos 10.2, 15, 17, 24 y 25 de la CE; 42 y siguientes y 76 de la Ley General Penitenciaria, y 94 LOPJ.

**Cuestiones analizadas:** Calificación de una pena como inhumana o degradante. Potestad sancionadora de la Administración en relación a situaciones de sujeción especial. Aplicabilidad de las garantías del proceso penal a procedimientos disciplinarios administrativos contra un condenado. El Juez de Vigilancia Penitenciaria como garante de los derechos fundamentales de los internos.

**Precedentes jurisprudenciales:** Aplicabilidad de las garantías del proceso penal a procedimientos disciplinarios: Sentencias núms. 18/1981, de 8 de junio; 21/1981, de 15 junio; 19/1982, de 5 de marzo; 73/1983, de 30 de julio; 82/1986, de 26 de junio, y, fundamentalmente, 74/1985, de 18 de junio.

**Comentario:**

La sentencia examina sucesivamente si el contenido del acuerdo sancionador, el carácter administrativo del órgano que impuso las sanciones y el desarrollo del procedimiento disciplinario respetaron los derechos fundamentales del recurrente.

Respecto al contenido de las tres sanciones, que fueron de aislamiento en celdas, con una suma total de treinta y tres días, la sentencia no estima contradicción ni con el artículo 15 CE, al no tratarse el confinamiento aislado en sí mismo de una sanción inhumana o degradante, ni con el artículo 25 CE, ya que, aunque las infracciones están tipificadas en el Reglamento General Penitenciario, ello se debe a la remisión que la Ley General Penitenciaria (arts. 42 y ss.) realiza a aquél en cuanto a la especificación de las mismas, por lo que existe la necesaria cobertura de la potestad sancionadora en una norma con rango de ley.

En relación al carácter administrativo del órgano que impuso la sanción, la sentencia sostiene que no vulnera la prohibición a la Administración civil de imponer sanciones que impliquen privación de libertad (art. 25 CE), por cuanto «las medidas disciplinarias aplicables contra el que está cumpliendo

una sentencia no pueden considerarse constitutivas de privación de libertad, sino tan sólo modificaciones de su detención legal», y, además, «el interno de un centro penitenciario está, respecto de la Administración penitenciaria, en una relación de sujeción especial, de la que deriva una potestad sancionatoria disciplinaria».

El Tribunal, tras examinar pormenorizadamente la aplicabilidad de las garantías del artículo 24 CE al procedimiento sancionador administrativo, tema del que ya se había ocupado en anteriores resoluciones, otorga el amparo por estimar que se lesionaron algunas en el procedimiento que se siguió en el caso concreto. En primer lugar, por la falta de intervención del juez de Vigilancia, cuya actividad, «aunque insertada en el seno de un procedimiento disciplinario administrativo, constituye una garantía de prestación judicial que, como tal, debe entenderse también amparada por el derecho del artículo 24.1 CE»; en segundo término, por habérsele negado comunicación con un letrado de su elección, impidiendo de este modo el asesoramiento para poder preparar adecuadamente su defensa en el procedimiento, y, finalmente, porque se desconoció su derecho fundamental a presentar pruebas pertinentes de descargo.

**Sentencia núm. 3/87, de 21 de enero (núm. Reg. 1029/85), «BOE» núm. 35.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Primera Instancia.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 CE, 11.3 LOPJ y 10 LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e imposición de formalismos enervantes como obstáculo a dicho derecho

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 19/1983, de 14 de marzo; 61/1983, de 21 de julio; 57/1984, de 8 de mayo; 70/1984, de 11 de junio; 60/1985, de 6 de mayo; 36/1986, de 12 de marzo; 87/1986, de 27 de junio, y 117/1986, de 13 de octubre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 4/87, de 23 de enero (núm. Reg. 865/85), «BOE» núm. 35.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Ministerio Fiscal.

**Acto impugnado:** Sentencia de Magistratura de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 CE y 19.a) del Real Decreto-ley de 4 de marzo de 1977.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y resolución judicial irrazonada; indefensión.

**Comentario:**

Las sentencias impugnadas resolvieron sin entrar en el fondo del asunto, limitándose a declarar la nulidad de todo lo actuado en el curso de un proceso de impugnación de convenios colectivos. Para ello se basaron decisivamente en una comunicación de la Dirección General de Trabajo, no razonada, mediante la que se señalaba la falta de legitimación que, conforme al artículo 19.a) del RDL de 4 de marzo de 1977, poseía una Dirección Provincial de Trabajo para ser demandante en aquel proceso y, por tanto, la ausencia de un presupuesto procesal necesario. El Tribunal estima que no fue vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva por haber aceptado como decisiva para el proceso tal comunicación administrativa irrazonada, por cuanto los órganos judiciales resolvieron atendiendo estrictamente, según la normativa legal, a cuál era el órgano legitimado, por lo que el informe administrativo debía versar, por su misma naturaleza, sobre hechos (falta de legitimación del órgano inferior) y no sobre razones. Tampoco advierte la sentencia indefensión del reclamante, dado que si ni siquiera recurrió a la vía procesal ordinaria en el ámbito laboral, difícilmente podría afirmarse que queda privado de toda posibilidad de defensa, en vía judicial, de sus intereses.

**Sentencia núm. 5/87, de 27 de enero (núm. Reg. 494/84), «BOE» núm. 35.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Gobierno Vasco.

**Acto impugnado:** Real Decreto. Paralelamente, se analiza el artículo 4.2 de la Ley 7/1981 del Parlamento Vasco, de 30 de junio, declarándole inconstitucional.

**Preceptos de referencia:** Artículos 56, 64, 152.1 CE, 33.3 Estatuto del País Vasco y art. 4.2 Ley 7/1981 del Parlamento Vasco, de 30 de junio, «Ley de Gobierno».

**Cuestión analizada:** El refrendo de los actos del Rey.

**Precedente jurisprudencial:** Sentencia núm. 16/1984, de 6 de febrero.

**Comentario:**

La competencia controvertida en el caso es el refrendo del Real Decreto de nombramiento de Lehendakari de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que había sido otorgado, conforme a los artículos 56.3 y 64.1 CE, por el presidente del Gobierno del Estado. Como concurría la particularidad de que el artículo 4.2 de la Ley de Gobierno vasca atribuía tal competencia al presidente del Parlamento autonómico, el conflicto se convirtió de este modo en un juicio acerca de la constitucionalidad de este precepto. La sentencia, tras analizar combinadamente los artículos 56 y 64 CE, que contienen la regulación esencial del refrendo, enjuicia si la diferencia que introduce a tal régimen el artículo 4.2 de la Ley de Gobierno vasca es constitucionalmente aceptable, concluyendo negativamente por mor del mandato inequívoco derivado del artículo 56.3 CE que impide admitir otras formas de refrendo que no sean las previstas en el artículo 64 CE. «Una vez establecida constitucional —art. 152.1— y estatutariamente —art. 33.3 EAPV— la exigencia de que el presidente de la Comunidad Autónoma ha de ser nombrado por el Rey, dicho nombramiento, como acto del Rey, queda sometido al régimen normativo contenido en los artículos 56.3 y 64.1 CE». Y, por tanto, se atribuye la

competencia al presidente del Gobierno para refrendar el Real Decreto de nombramiento del presidente del Gobierno Vasco y se declara inconstitucional el artículo 4.2 de la Ley de Gobierno vasca.

Sentencia núm. 6/87, de 28 de enero (núm. Reg. 966/85), «BOE» núm. 35.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sr. Díez Picazo

Fallo: Estimatorio.

Actor: Particular.

Acto impugnado: Sentencia de Juzgado de Distrito.

Precepto de referencia: Artículo 24 de la CE.

Cuestiones analizadas: Presunción de inocencia. Indefensión y *reformatio in peius*.

Precedente jurisprudencial: *Reformatio in peius*. Véase sentencia número 134/86, de 29 de octubre, y jurisprudencia allí citada.

Comentario:

La Sala, reiterando jurisprudencia precedente, estima que la presunción de inocencia no concierne a las valoraciones o calificaciones que los juzgadores puedan establecer. De igual modo, que el empeoramiento de la condición jurídica de un apelante condenado en la primera instancia de un proceso penal, como consecuencia exclusiva de su recurso de apelación, vulnera el derecho reconocido en el artículo 24.1 CE, motivo este último por el cual otorga parcialmente el amparo.

Sentencia núm. 7/87, de 28 de enero (núm. Reg. 1096/85), «BOE» núm. 35.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14 CE, 49.7 Estatuto de los Trabajadores y 81.2 Ley de Contrato de Trabajo.

**Cuestión analizada:** Principio de no discriminación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 79/1982, de 20 de diciembre, y 37/1986, de 20 de marzo.

**Comentario:**

Carece de interés doctrinal.

Sentencia núm. 8/87, de 29 de enero (núm. Reg. 455/85), «BOE» núm. 35.

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno Vasco.

**Acto impugnado:** Real Decreto.

**Preceptos de referencia:** Artículos 56.3, 64.1, 152.1 CE y 33 Estatuto de Autonomía del País Vasco.

**Cuestión analizada:** Refrendo de los actos del Rey.

**Precedente jurisprudencial:** Sentencia núm. 5/1987, de 27 de enero.

**Comentario:**

El conflicto es idéntico en cuanto a las materias controvertidas, planteamiento, alegaciones parciales y partes al que tuvo ocasión de resolver el Tribunal en la Sentencia 5/1987, de 27 de enero, por lo que reitera la doctrina allí expuesta.

**Sentencia núm. 9/87, de 29 de enero (núm. Reg. 477/85), «BOE» núm. 35.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particulares.

**Acto impugnado:** Providencia y auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24 CE y disposición transitoria segunda de la Ley 34/1986, de 6 de agosto.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva; imposición de formalismos enervantes como obstáculo a dicho derecho; indefensión.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias de 20 de junio, 10 y 16 de julio y 22 y 29 de octubre de 1986.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 10/87, de 29 de enero (núm. Reg. 116/86), «BOE» núm. 35.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. García Mon.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto de la Sala de lo Civil de Audiencia Territorial.

**Precepto de referencia:** Artículo 24.1 CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inadmisión del recurso de casación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Por todos, véase sentencia núm. 97/86, de 10 de julio.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 11/87, de 30 de enero (núm. Reg. 202/84), «BOE» núm. 35.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Decisiones de Juzgado de Instrucción por las que se aprueban la refundición y liquidación de condenas.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 CE, 70.2 Código penal y 988 LECr.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e interposición de los recursos establecidos en las leyes; indefensión.

**Comentario:**

Carece de interés doctrinal.

**Sentencia núm. 12/87, de 4 de febrero (núm. Reg. 920/85), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de la Sala de lo Civil de Audiencia Territorial.

**Precepto de referencia:** Artículo 24.1 CE.

**Cuestiones analizadas:** Indefensión y derecho a la defensa contradictoria de las partes. Posibilidad de apreciación por el juzgador en segunda instancia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias 4/1982, de 8 de febrero; 20/1982, de 5 de mayo, y 15/1984, de 6 de febrero.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 13/87, de 5 de febrero (núm. Reg. 1054/85), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díez Picazo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad anónima.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14, 24.1 y 120.3 CE

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y motivación de las sentencias.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 5/86, de 21 de enero y 27/86, de 19 de febrero.

**Comentario:**

La sentencia, tras reiterar la doctrina del TC acerca de que el derecho a la tutela judicial comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, «que, por regla general, es una sentencia que se pronuncie sobre las pretensiones y cuestiones litigiosas desarrolladas por las partes en el proceso», afirma que también comprende el derecho a que tal sentencia sea motivada. Esta conclusión es obtenida de la relación sistemática del artículo 24.1 con el artículo 120.3 CE, precepto este último que establece que las sentencias serán siempre motivadas. La norma constitucional de necesaria motivación de las sentencias expresa la relación de vinculación del juez con la ley y el sistema de fuentes del Derecho dimanante de la Constitución y también un

derecho del justiciable y el interés legítimo de la comunidad jurídica en general de conocer las razones de la decisión que se adopta. Por ello, «entraña violación del derecho establecido en el artículo 24.1 CE una sentencia carente de motivación o cuya motivación no fuera reconocible como aplicación del sistema jurídico». Ahora bien, al juzgador no le es exigible una puntual respuesta de todas las alegaciones y argumentaciones jurídicas que las partes puedan efectuar, ni corresponde al TC «enjuiciar o censurar la parquedad de una fundamentación o la forma de estructurar una sentencia y de establecer la conexión entre las consideraciones de ésta y las alegaciones de las partes»; criterios que, aplicados al caso concreto, condujeron a la denegación del amparo.

**Sentencia núm. 14/87, de 11 de febrero (núm. Reg. 1084/85), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Providencia de Magistratura de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 CE y 26, 27, 32, 33 y 74 Ley de Procedimiento Laboral.

**Cuestiones analizadas:** Indefensión y citación defectuosa por correo; finalidad de los actos de comunicación procesal; tutela judicial efectiva e interpretación más favorable a su ejercicio de las normas procesales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 1/1983, de 13 de enero, y 156/1985, de 15 de noviembre.

**Comentario:**

La Sala otorga el amparo frente a la resolución de Magistratura en cuya virtud se tenía por desistido del proceso al actor, posteriormente recurrente en amparo, por su incomparecencia a los actos de conciliación y juicio, para los que fue defectuosamente citado por correo. El magistrado de Trabajo cumplió formalmente todo el sistema de ordenación de los actos de comuni-

cación de los órganos judiciales con las partes procesales previsto en la LPL. Pero el TC, sobre la base de la interpretación de las normas procesales más favorable al ejercicio del derecho a la tutela judicial, acude a una interpretación finalista de los actos de comunicación procesales para concluir que su finalidad, «llevar al conocimiento personal de los litigantes las decisiones y resoluciones judiciales a fin de que éstos puedan adoptar ante ella la conducta procesal que consideren oportuna en defensa de sus derechos e intereses», no fue satisfecha en el caso de autos por el defectuoso cumplimiento de las citaciones postales expedidas por correo certificado con acuse de recibo hizo el agente de Correos.

**Sentencia núm. 15/87, de 11 de febrero (núm. Reg. 465/86), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Instrucción.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24 CE y 109, 110 y 902 LECr.

**Cuestiones analizadas:** Indefensión y *reformatio in peius*: la *reformatio in peius* en los procesos penales a través de los que se piden y se conceden indemnizaciones por perjuicios materiales o morales.

**Precedente jurisprudencial:** Sentencia núm. 134/1986, de 29 de octubre.

**Comentario:**

Después de determinar los contornos de la interdicción de la *reformatio in peius* en los ámbitos civil y penal, la sentencia sostiene que también en lo que concierne a las indemnizaciones por daños resultantes de delito o falta rige en el ámbito del proceso penal la regla prohibitiva de la *reformatio in peius*. Sin embargo, es la conexión necesaria entre esta regla y la prohibición constitucional de la indefensión (art. 24.1 CE) la que presta trascendencia constitucional a las infracciones de aquélla. Y, por tanto, como ocurre en el proceso que dio lugar al recurso de amparo, «no existirá —infracción de la

prohibición de la *reformatio in peius* en ese ámbito— cuando la sentencia de apelación, aunque pueda considerarse constitutiva de una *reformatio in peius*, se produce al término de un debate en el que frente al apelante se han podido sostener otras pretensiones de las que éste pudo defenderse y que liberan al juez de los límites establecidos por lo ya acordado en la primera instancia».

Sentencia núm. 16/87, de 12 de febrero (núm. Reg. 641/85), «BOE» núm. 54.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particulares.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.1 de la CE y disposiciones transitorias de la Ley 34/84, de 6 de agosto, de reforma de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inadmisión de recurso de casación; significado de las exigencias formales; la imposición de formalismos enervantes como obstáculo a dicho derecho.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 81/1986, de 20 de junio, y 120, 121, 122, 123 y 124/1986, de 22 de octubre.

**Comentario:**

Reitera la doctrina de la STC 81/1986, de 20 de junio.

Sentencia núm. 17/87, de 13 de febrero (núm. Reg. 457/86), «BOE» núm. 54.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de la Audiencia Nacional.

**Preceptos de referencia:** Artículos 17.1 y 81.1 de la CE y 6.c) de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, de régimen jurídico de control de cambios.

**Cuestiones analizadas:** Reserva de ley orgánica para las regulaciones penales de penas privativas de libertad; reserva que no alcanza a la pena de multas.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 140/1986, de 31 de diciembre, y 160/1986.

**Comentario:**

La sentencia vierte al caso concreto la doctrina de las sentencias 140 y 160/1986, concluyendo, lógicamente, que la imposición al recurrente de una pena privativa de libertad en aplicación de un precepto declarado inconstitucional de una ley ordinaria, la Ley 40/1979, vulnera el derecho a la libertad del artículo 17.1 CE. Asimismo, estima que la pena de multa impuesta al recurrente no vulnera dicho derecho, pues no supone restricción de libertad.

Sentencia núm. 18/87, de 16 de febrero (núm. Reg. 980/87), «BOE» núm. 54.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Resolución de director general.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14 y 23.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad ante la ley en provisión de puestos de Caja Postal de Ahorros. Acceso en condiciones de igualdad a cargos y funciones públicas.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 50/86, de 23 de abril, y jurisprudencia allí citada.

**Comentario:**

La Sala, previamente, afirma el carácter público que reviste el nombramiento de empleados de la Caja Postal y delimita el objeto del recurso en la determinación de si el nombramiento del que trae origen la causa vulnera los derechos del recurrente que resultan de los artículos 14 y 23.2 CE por haber sido realizado sin mediar anuncio o convocatoria pública. La sentencia no observa desigualdad de trato, puesto que la provisión del puesto se llevó a cabo, aunque no por el procedimiento general, por uno especial también reglado; de cuyo análisis —junto con la respuesta administrativa a la reclamación del posteriormente recurrente— se deduce que tal provisión no fue arbitraria o discriminatoria. Tampoco se advierte vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargos y funciones públicas, puesto que «no lesiona el mencionado derecho la exigencia de distintos requisitos o condiciones que los ciudadanos deban reunir para aspirar a los distintos cargos o funciones, ya que lo que el artículo 23.2 CE viene a prohibir es que las reglas de procedimiento para el acceso a los cargos y funciones públicas se establezcan no mediante términos generales y abstractos, sino mediante referencias individuales y concretas».

**Sentencia núm. 19/87, de 17 de febrero (núm. Reg. 665/84), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Díez Picazo.

**Fallo:** Estimatorio.

**Promotor:** Sala de Audiencia Territorial.

**Acto impugnado:** Artículo 13.1 de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre (de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las Haciendas locales).

**Preceptos de referencia:** Artículos 14, 31, 132, 137, 140 y 142 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad ante la ley. Principio de unidad tributaria en todo el territorio nacional; principio de legalidad tributaria; legalidad tributaria y principio de autonomía territorial.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Principio de legalidad tributaria: Sentencias núms. 37/1981, de 16 de noviembre; 6/1983, de 4 de febrero; 83/1984, de 24 de julio, y 179/1985, de 19 de diciembre. b) Legalidad tributaria y principio de autonomía municipal: Sentencias núms. 1/1981, de 26 de enero; 179/1985, de 19 de diciembre, y 60/1986, de 20 de mayo.

**Comentario:**

El precepto cuya constitucionalidad se cuestiona es el artículo 13.1 de la Ley 24/83, que habilitaba a los Ayuntamientos para fijar libremente el tipo de gravamen de la contribución territorial urbana y también de la rústica y pecuaria. El promotor estimaba que tal precepto vulneraba las normas constitucionales de igualdad, al hacer posible un trato diferenciado entre los contribuyentes del país, pero a ello objeta el Tribunal su doctrina acerca de que la desigualdad no supone por sí misma discriminación si existe una justificación (consecución de fines constitucionalmente lícitos), como ocurre precisamente en el caso planteado.

También se impugnaba la presunta lesión por parte del artículo 13.1 de la Ley 24/83 de las normas constitucionales de reserva de ley tributaria y, más específicamente, las limitadoras de las potestades tributarias de los entes territoriales distintos del Estado. La sentencia admite como misión del Tribunal la de hacer valer, cuando así se le requiera, la subsistencia equilibrada de dos imperativos constitucionales —con el fin de que no se eliminen entre sí en sus respectivos despliegues—: el principio de reserva de ley estatal en el orden tributario (art. 133.1 CE) y el principio de autonomía local (artículos 137 y 140 CE), que en este ámbito se manifiesta en la posibilidad de establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes (artículo 133.2 CE). Pues bien, después de analizar genéricamente las relaciones entre tales principios, la sentencia, aplicando los criterios obtenidos, declara inconstitucional el artículo 13.1 de la Ley 24/83, ya que este precepto procura un pleno desapoderamiento del legislador en favor de las Corporaciones locales para fijar «libremente» un elemento esencial en la definición de los tributos, y aunque éstos tengan un carácter local, «la renuncia plena por la ley a todo encuadramiento normativo a la potestad tributaria no se acomoda con lo dispuesto en el artículo 133.2 CE ni con la general reserva de ley establecida en este ámbito por el artículo 31.3 CE».

**Sentencia núm. 20/87, de 19 de febrero (núm. Reg. 1092/85), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 1.1 y 24 de la CE, 70.2 Código penal y 746.6 y 747 LECr.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e incongruencia omisiva de sentencias. Presunción de inocencia; valoración del conjunto de la prueba practicada en un proceso. El principio acusatorio en el proceso penal.

**Comentario:**

La Sala otorga el amparo al recurrente, pues fue condenado por unos hechos que no fueron objeto de acusación, con lo que se produjo una vulneración del principio acusatorio.

**Sentencia núm. 21/87, de 19 de febrero (núm. Reg. 1126/85), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.2 y 25.1 de la CE y 2.8 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

**Cuestiones analizadas:** Principio de legalidad penal e imposición de medidas de seguridad. *Non bis in idem*. Presunción de inocencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 159/1985, de 27 de noviembre, y 23/1986, de 14 de febrero.

**Comentario:**

Reitera la doctrina expuesta en la sentencia núm. 23/1986, de 14 de febrero.

**Sentencia núm. 22/87, de 20 de febrero (núm. Reg. 835/84), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Distrito.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 172 y 175 LECr.

**Cuestiones analizadas:** Indefensión; citación defectuosa a juicio verbal de faltas.

**Comentario:**

La sentencia sostiene que los requisitos legales para practicar la citación a juicio por persona distinta de la interesada (en el caso, una vecina) ofrecen relevancia constitucional por su directa conexión con el derecho a la defensa (art. 24.1 CE). Tras observar la carencia de cumplimiento de varios de ellos, la Sala otorga el amparo.

**Sentencia núm. 23/87, de 23 de febrero (núm. Reg. 878/84), «BOE» núm. 54.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad anónima.

**Acto impugnado:** Sentencias del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 22, 24.1, 33.3, 117.3 y 123.1 de la CE y 35.2, 36 y 349 Código civil.

**Cuestiones analizadas:** Derecho de asociación: su extensión a las sociedades mercantiles.

**Comentario:**

La cuestión más relevante que cabe inferir de la sentencia es la relativa a si el término «asociación» usado en el artículo 22 CE comprende tanto las uniones de personas de finalidad no lucrativa como las de fines lucrativos, es decir, las sociedades, y entre ellas las anónimas. Aunque reconoce la apertura de fines del derecho de asociación a éstas, en base a criterios comparados (arts. 18 C. italiana y 9.1 L. F. Bonn) y a una interpretación de la Constitución en este punto conforme a los artículos 35.2 y 36 del Código civil, la sentencia afirma que dicho derecho sólo podría invocarse en aquellos casos en que realmente apareciese vulnerado su contenido. Y, por tanto, como en las sociedades mercantiles, en particular, las capitalistas, predomina, frente a las relaciones derivadas de la unión de personas, las nacidas de la unión de capitales, «sin excluir la posibilidad de que en determinados casos pueda producirse una lesión del derecho de asociación respecto a este tipo de sociedades, es necesario plantear en cada supuesto si el derecho de que se trata y que se entiende lesionado es efectivamente de naturaleza asociativa o bien tiene un carácter preferentemente económico». En el caso objeto del recurso, la cuestión —posibilidad de que un acuerdo social redujera sin indemnización las facultades del usufructuario— se refería, sobre todo, al contenido de derechos patrimoniales relacionados con el artículo 33.3 CE, por lo que caía fuera del derecho de asociación y del ámbito del recurso de amparo.

Sentencia núm. 24/87, de 25 de febrero (núm. Reg. 1124/85), «BOE» núm. 71.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Asociación de Fiscales.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 22.1, 24.1 y 127 de la CE y 28 y 32 LRJCA.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva e interpretación más favorable a su ejercicio de las normas procesales; inadmisión del proceso por falta de legitimación activa.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 126/1984, de 26 de diciembre, y 4/1985, de 18 de enero.

**Comentario:**

La sentencia aplica la doctrina consolidada del TC respecto al derecho a la tutela judicial efectiva y la interpretación de las normas procesales más favorable a su efectividad en relación al supuesto de inadmisión del proceso fundada en carencia de legitimación activa. De este modo, declara vulneradora de dicho derecho fundamental la interpretación restrictiva que la sentencia del Supremo realizó de los artículos 28 y 32 LRJCA sobre la legitimación activa de las asociaciones en los procesos contencioso-administrativos; afirmando, para el caso concreto, que la Asociación de Fiscales sí la posee, al tener un interés directo y legítimo en el asunto. A ello añade la sentencia que debe potenciarse la legitimación de tal Asociación para promover procesos en defensa de sus intereses profesionales, pues es el único cauce que tiene la carrera fiscal para defenderlos, dada la prohibición constitucional que pesa sobre ella en orden a pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127 CE).

Sentencia núm. 25/87, de 26 de febrero (núm. Reg. 1070/85), «BOE» núm. 71.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 14 de la CE y disposición transitoria segunda de la Ley 31/1984, de 2 de agosto.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad en la aplicación de la ley.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 8/1981, de 30 de marzo; 49/1982, de 14 de julio; 103/1984, de 12 de noviembre; 127/1984, de 26 de diciembre; 14/1985, de 1 de febrero; 49/1985, de 28 de marzo; 57/1985, de 29 de abril; 140/1985, de 21 de octubre; 166/1985, de 9 de septiembre; 32/1986, de 30 de abril, y 58/1986, de 14 de mayo.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 26/87, de 27 de febrero (núm. Reg. 794/83), «BOE» núm. 71.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. García Mon.

**Fallo:** Estimatorio. Votos particulares de los señores Díez Picazo, Rubio Llorente (al que se adhiere el señor Díaz Eimil) y Latorre.

**Actor:** Gobierno Vasco.

**Acto impugnado:** Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de reforma universitaria.

**Preceptos de referencia:** Artículos 27.10, 81, 149.1 (1, 18 y 30) y 162.1.a de la CE, 16 del EAPV y 28.1 y 32.2 de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Legitimación de los órganos autonómicos en el recurso de inconstitucionalidad. Autonomía universitaria; derecho fundamental o garantía institucional; la libertad académica, fundamento de la autonomía universitaria; competencias autonómicas en materia universitaria.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Legitimación de los órganos autonómicos en el recurso de inconstitucionalidad: sentencias núms. 25/81, de 14 de julio, y 84/82, de 23 de diciembre. b) Concepto de autonomía: sentencias nú-

meros 5/81, de 13 de febrero, y 63/82, de 20 de octubre. c) LRU: Sentencia núm. 148/86, de 25 de noviembre.

### Comentario:

Recurso promovido por el Gobierno vasco en base a un doble tipo de consideraciones: de un lado, por una presunta inconstitucionalidad material de los enunciados de la ley (el abogado del Estado cuestiona la legitimación del Gobierno vasco para este tipo de reparos, siendo rechazada dicha tesis por el Tribunal); de otro lado, estima el Gobierno vasco que la ley impugnada invade el ámbito de competencias estatutariamente asignado a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dado que el tema de fondo que se debate es, a su vez, el de la autonomía universitaria, el problema que, en suma, se debate es el deslinde de esferas en materia universitaria: la estatal, la autonómica y la universitaria.

Dos son los problemas teóricos centrales en torno a los que gira la sentencia (y en gran medida los votos particulares). En primer término, con especial intensidad, la naturaleza de la autonomía universitaria, que para el Gobierno vasco ha de considerarse como derecho fundamental y para el abogado del Estado debe encuadrarse en la categoría de garantía institucional, con la consecuencia del menor o mayor margen de disponibilidad del legislador. La sentencia declara al respecto que «el fundamento y justificación de la autonomía universitaria está en el respeto a la libertad académica; es decir, a la libertad de enseñanza, estudio o investigación»; atendiendo a esta circunstancia, ponderando la ubicación del precepto y los debates constituyentes y extrapolando (como indica el voto particular del señor Díaz Picazo) el sujeto del hipotético derecho a la autonomía, la sentencia se pronuncia en favor de la consideración de la autonomía universitaria como derecho fundamental, con el consiguiente realce de la idea de contenido esencial: «Hay, pues, un contenido esencial de la autonomía universitaria que está formado por todos los elementos necesarios para el aseguramiento de la libertad académica.»

El segundo punto de carácter general que provocará discrepancias entre las partes y que será parcamente resuelto por la sentencia es el de las competencias estatales en materia universitaria. Estima el Gobierno vasco que la ley a que remite el artículo 27.10 de la CE no es tan sólo la impugnada, sino también el EAPV; la competencia exclusiva del Estado derivará, por tanto, según el Gobierno vasco, de los apartados 1, 18 y 30 del artículo 149.1.

La sentencia, con carácter general sobre el tema, se limitará a indicar: «El enfoque en materia de competencia estatal ha de ser, con carácter general, el inverso: no hay más límites a tal competencia que los que la Constitución y, en su desarrollo, los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas.»

A la luz de estas consideraciones generales, la sentencia analiza cada una de las objeciones puntuales que realiza el recurrente, declarando inconstitucionales aquellos preceptos que asignan al Consejo Social (al que se ha definido como órgano de participación de la sociedad en la estructura universitaria, pero no expresión de autogobierno) funciones que podían mediatizar la libertad académica (arts. 39.1 y 47.3 LRU); asimismo, se califica como imposición forzosa a las universidades, contraria a su autonomía, la fijación por la ley de la composición de las comisiones que han de juzgar los concursos de méritos entre profesores. Finalmente, junto con algunos aspectos interpretativos (en cuanto propios de las sentencias interpretativas), la sentencia niega el carácter orgánico a diversos preceptos de la ley impugnada.

**Sentencia núm. 27/87, de 27 de febrero (núm. Reg. 11/84), «BOE» núm. 71.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Estimatorio. Voto particular del señor Rubio Llorente.

**Actor:** Cincuenta y tres senadores.

**Acto impugnado:** Ley 2/83, de 4 de octubre, de la Generalidad Valenciana, por la que se declaran de interés general para la Comunidad Valenciana determinadas funciones propias de las Diputaciones Provinciales.

**Preceptos de referencia:** Artículos 137, 141 y 149.1.18 de la CE; 47.3 y 5 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; 7.2, 10.2 y 59 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

**Cuestiones analizadas:** Autonomía local. La coordinación de la actividad de las Corporaciones locales; función y alcance; su carácter de límite al pleno ejercicio de las competencias propias. Controles sobre las Corporaciones locales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 4/81, de 2 de febrero; 32/81, de 28 de julio; 32/83, de 28 de abril, y 42/83, de 20 de mayo.

**Comentario:**

Sentencia que pese a su prolija argumentación carece de interés doctrinal desde el plano estricto del Derecho constitucional. El Tribunal comienza recordando los puntos centrales de su jurisprudencia precedente sobre las nociones de autonomía local, sobre la función y el alcance de la coordinación de la actividad de las Corporaciones locales y sobre los posibles controles del ejercicio de las competencias de las citadas entidades locales.

En segundo término, la sentencia delimita los parámetros de constitucionalidad en que ha de basarse el control del Tribunal sobre la base de la competencia estatal para la fijación de los principios o criterios básicos en esta materia (art. 149.1.18). Integran así el bloque de constitucionalidad sobre dicho tema el artículo 47 (3 y 5) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los artículos 7.2, 10.2 y 59 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Sentadas tales premisas en los cuatro primeros fundamentos jurídicos, los restantes (5 a 9) se dedican a contrastar las disposiciones impugnadas con ese bloque de constitucionalidad integrado por los preceptos estatutarios y legales antes citados.

**Sentencia núm. 28/87, de 5 de marzo (núm. Reg. 969/85), «BOE» núm. 71.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad anónima.

**Acto impugnado:** Resolución Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 44.2 de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y doble instancia. Incongruencia de las resoluciones judiciales. Plazo de interposición

del recurso de amparo; prolongación artificiosa del mismo mediante el planteamiento de recursos judiciales inexistentes o manifiestamente improcedentes.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Doble instancia: Sentencias núms. 36/86, de 12 de febrero; 67/86, de 27 de mayo, y 117/86, de 13 de octubre. b) Incongruencia de las resoluciones judiciales: Sentencia núm. 32/86, de 21 de febrero. c) Plazo de interposición de recurso de amparo: Sentencia núm. 120/86, de 22 de octubre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 29/87, de 6 de marzo (núm. Reg. 265/86), «BOE» núm. 71.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14 de la CE, 29 y disposición transitoria segunda de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 146.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

**Cuestión analizada:** Principio de igualdad; su carácter vinculante para el legislador.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 22/81, de 2 de julio; 24/81, de 10 de noviembre; 75/83, de 2 de agosto; 1/84, de 16 de enero; 99/84, de 5 de noviembre; 107/84, de 23 de noviembre; 162/85, de 29 de noviembre; 76/86, de 9 de junio, y 148/86, de 25 de noviembre.

**Comentario:**

Recurso promovido por los secretarios de Justicia que prestaban servicios como facultativos en el CGPJ. Frente a la homogeneidad de funciones de

todos los funcionarios que prestaban servicios con tal carácter en el Consejo y que por acuerdo de 1981 del Pleno de aquél percibían sus retribuciones con independencia del cuerpo de procedencia, el CGPJ, mediante un nuevo acuerdo que ahora se impugna, basado en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Presupuestos de 1985, les da un tratamiento retributivo diferente, violando así el principio de igualdad.

El Tribunal reitera los criterios básicos precedentemente sentados acerca del principio de igualdad (dicho principio vincula también al legislador, siendo residenciable en sede constitucional por vía de amparo; el principio de igualdad no impide que el legislador pueda valorar situaciones y regularlas distintamente siempre que ello obedezca a una causa justificada y razonable; para determinar si un trato diferente es contrario al artículo 14 es necesario también precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente comparables). A la luz de dicha doctrina, la Sala desestima el recurso.

Sentencia núm. 30/87, de 11 de marzo (núm. Reg. 230/86), «BOE» núm. 71.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Precepto de referencia:** Artículo 14 de la CE.

**Cuestión analizada:** Principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 49/85, de 28 de marzo; 183/85, de 20 de diciembre; 58/86, de 14 de mayo, y 125/86, de 22 de octubre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 31/87, de 12 de marzo (núm. Reg. 1171/85), «BOE» núm. 71.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Instancia.

**Precepto de referencia:** Artículo 24.1 y 2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Indefensión y *reformatio in peius*. Presunción de inocencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Indefensión y *reformatio in peius*: Sentencias núms. 75/86, de 4 de junio, y 134/86, de 29 de octubre, y jurisprudencia citada en esta última. b) Presunción de inocencia: por todos, véase sentencia núm. 47/86, de 21 de abril, y jurisprudencia allí citada.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 32/87, de 12 de marzo (núm. Reg. 1220/87), «BOE» núm. 71.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Estimatorio. Voto particular de los señores Rubio Llorente y Díez Picazo.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Providencia de Juzgado de Instrucción.

**Preceptos de referencia:** Artículos 9.3, 17.1 y 4 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la libertad personal y prisión provisional; las normas reguladoras de la prisión provisional inciden en un derecho

individual. Irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Libertad personal y prisión provisional: Sentencias núms. 41/82, de 2 de julio; 127/84, de 26 de diciembre; 85/85, de 10 de julio, y 140/86, de 11 de noviembre.

**Comentario:**

El problema debatido en el presente recurso es el de si a la resolución de una petición de libertad provisional ha de aplicarse la norma vigente en ese momento, dado el carácter adjetivo y procesal de las normas reguladoras de la prisión provisional, o bien si, como sostiene el recurrente, ha de aplicarse la norma más favorable, que en el presente caso es la del momento en que fue decretada la prisión provisional, esto es, una norma anterior a la vigente. El Tribunal, en la medida en que tales normas afectan a derechos individuales, y muy especialmente al derecho a la libertad personal, se pronuncia en favor de la tesis del recurrente.

**Sentencia núm. 33/87, de 12 de marzo (núm. Reg. 67/87), «BOE» núm. 71.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Precepto de referencia:** Artículo 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Indefensión por no contradicción. Derecho a la tutela judicial efectiva y ejecución de las decisiones judiciales; su conexión con la interdicción de la indefensión.

**Precedentes jurisprudenciales:** Ejecución de las decisiones judiciales: Sentencias núms. 32/82, de 7 de junio; 61/84, de 16 de mayo; 67/84, de 7 de junio; 109/84, de 26 de noviembre; 65/85, de 23 de mayo; 106/85, de

7 de octubre; 155/85, de 12 de noviembre; 176/85, de 17 de diciembre; 15/86, de 31 de enero, y 33/86, de 21 de febrero.

**Comentario:**

En un proceso laboral de ejecución de sentencia, incoado a instancias del trabajador por no haber sido regularmente readmitido como disponía la sentencia dictada en el precedente juicio de despido, el TCT declara extinguido el contrato de trabajo por abandono del trabajador. Esta decisión es ahora impugnada en base a una presunta indefensión por no contradicción, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (en cuanto al derecho a que las sentencias judiciales sean ejecutadas) y violación del principio de igualdad.

No estima la Sala que no haya habido contradicción. Sí estima, en cambio, el recurso en base a la segunda alegación. A tal efecto, la sentencia declara que «la denegación de la ejecución no puede ser arbitraria ni irrazonable, ni fundarse en una causa inexistente, ni en una interpretación restrictiva del derecho fundamental». Sin embargo, el motivo último de admisión del recurso reside en que el Tribunal, en este tipo de procedimiento, no puede excederse del objeto propio del proceso de ejecución. Al hacerlo así, «ha producido objetivamente una indefensión al solicitante de amparo, el cual, por las propias características del procedimiento de ejecución de sentencia de despido, no ha podido contar con los medios probatorios ni la amplitud de alegaciones y de examen de los hechos que corresponderían a un juicio ordinario».

Sentencia núm. 34/87, de 12 de marzo (núm. Reg. 197/86), «BOE» núm. 71.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Estimatorio. Voto particular de los señores Díez Picazo y Rubio Llorente.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto de la Audiencia Nacional.

**Preceptos de referencia:** Artículos 9.3 y 17.1 y 4 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la libertad personal y prisión provisional.

**Precedente jurisprudencial:** Sentencia núm. 32/87, de 12 de marzo.

**Comentario:**

Recurso sustancialmente idéntico al reseñado en los precedentes jurisprudenciales, reiterando la doctrina allí sentada.

**Sentencia núm. 35/87, de 18 de marzo (núm. Reg. 27/86), «BOE» núm. 89.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Emil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Instrucción.

**Preceptos de referencia:** Sec. III de la Ley 62/78, de 26 de diciembre, y disposición transitoria segunda de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Recurso judicial previo al amparo de la Ley 62/78; efectos de la inadmisión de éste. Eficacia retroactiva de la Constitución en materia de derechos fundamentales.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Ley 62/78: Sentencias núms. 12/82, de 31 de marzo; 74/82, de 7 de diciembre, y 31/84, de 7 de marzo. b) Eficacia retroactiva de la Constitución: Sentencias núms. 9/81, de 31 de marzo; 10/81, de 6 de abril; 43/82, de 6 de julio; 63/82, de 20 de octubre, y 67/82, de 15 de noviembre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 36/87, de 25 de marzo (núm. Reg. 85/86), «BOE» núm. 89.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díez Picazo.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Resoluciones de Magistratura de Trabajo.

**Precepto de referencia:** Artículo 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva; la falta de emplazamiento personal puede constituir lesión constitucional.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 1/83, de 13 de enero; 37/84, de 14 de marzo; 158/85, de 26 de noviembre, y 22/87, de 20 de febrero.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 37/87, de 26 de marzo (núm. Reg. 685/84), «BOE» núm. 89.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Cincuenta y tres senadores.

**Acto impugnado:** Ley del Parlamento de Andalucía núm. 8/84, de 3 de julio, de Reforma Agraria.

**Preceptos de referencia:** Artículos 9.2, 14, 31.1, 33, 38, 40, 45, 53.1, 128.1, 130.1, 139.1, 149.1 (1, 8, 13, 14 y 18), 156.1 y 157 de la CE; artículos 15.1.2, 18.1.4 y 57 del E. de A. de Andalucía; arts. 5.1 y 6.2 de la LOFCA, y art. 348 del Cc.

**Cuestiones analizadas:** Derecho de propiedad; contenido esencial; límites; utilidad individual y función social del derecho de propiedad. Libertad de empresa; límites. Distribución de competencias entre el Estado y la CA de Andalucía en materia de expropiación forzosa. Igualdad de derechos en todo

el territorio nacional. Potestad tributaria de las CCAA; posibilidad de establecer tributos con funciones extrafiscales.

**Comentario:**

La sentencia comienza sus fundamentos jurídicos con una sistematización de los problemas que suscitan los recurrentes, que, por su claridad y brevedad, constituye el mejor resumen de los temas abordados: «Las cuestiones relativas a la supuesta inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, del Parlamento de Andalucía, que se suscitan en el presente recurso, pueden sistematizarse en tres bloques de materias para su mejor estudio y resolución. El primero se refiere a las presuntas violaciones de los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de empresa. El segundo concierne a la alegada incompetencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía para regular determinados aspectos contenidos en la Ley impugnada, por infracción de ciertos preceptos constitucionales relativos a la distribución de competencias entre aquélla y el Estado, así como de los correspondientes preceptos del Estatuto de Autonomía para Andalucía; en este grupo temático debe incluirse también la impugnación relativa a la infracción del principio de igualdad en que incurriría la Ley andaluza que los recurrentes combaten. El tercero y último bloque material de cuestiones, más específico, tiene por objeto la pretendida inconstitucionalidad del impuesto sobre tierras infrautilizadas regulado en la citada Ley andaluza.»

En relación al primer punto (derecho de propiedad, libertad de empresa), la sentencia analiza el contenido esencial del derecho de propiedad, extrapolando jurisprudencia precedente sobre el concepto de contenido esencial (sentencia 11/81, de 8 de abril) y advirtiendo de la inescindible unidad conceptual del derecho de propiedad con sus respectivos límites («utilidad individual y función social definen inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes»), límites que, de otra parte, responden a principios establecidos e intereses tutelados por la propia Constitución y de cuya eficacia normativa no es posible sustraerse a la hora de pronunciarse sobre una presunta lesión del derecho de propiedad (artículos 40, 45, 128.1 y 130). Es cierto que la traducción institucional de estas exigencias colectivas no puede llegar a anular la utilidad meramente individual del derecho, a cuyos efectos opera la idea de contenido esencial, pero, en todo caso, tampoco es posible concebir esta figura jurídica con arreglo al tipo abstracto descrito en el artículo 348 del Cc. Por lo que se refiere

a la libertad de empresa, advirtiendo igualmente de la existencia de límites constitucionalmente tasados que delimitan su contenido, la sentencia no aprecia vulneración de aquélla por la ley impugnada.

En cuanto al segundo tema (competencia de la CA de Andalucía para regular dicho tema y posible vulneración del principio de igualdad), la sentencia no considera que el tema quede comprendido en la competencia estatal exclusiva para la legislación civil, al menos en los términos en que lo propugnan los recurrentes, pues en dicha posición subyace una concepción de la propiedad privada, como institución unitaria regulada en el Cc, que no es compatible con la dimensión institucional de dicho derecho, a la que ya se ha hecho referencia. Más ponderada es la posición del Tribunal respecto a la competencia exclusiva del Estado para regular la expropiación forzosa, toda vez que no reduce dicha competencia a la legislación básica; la legislación estatal se concreta, en opinión de la sentencia, en la regulación uniforme de la institución como garantía de los particulares afectados (criterios y sistema de valoración del justiprecio y del procedimiento expropiatorio); no alcanza, en cambio, dicha competencia estatal a «la potestad de definir legalmente los supuestos en que cabe hacer uso del instrumento expropiatorio mediante la declaración de la causa *expropiandi* necesaria en cada caso».

De lo dicho hasta aquí, así como de precedente jurisprudencia sobre las desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las CCAA (sentencia 37/81, de 16 de noviembre), se colige el rechazo de las alegaciones que tienen su base en el principio de igualdad.

Tampoco estima la sentencia que la ley impugnada infrinja la competencia estatal sobre la hacienda general, ya que «basta una lectura atenta para concluir que la Comunidad no se arroga en modo alguno facultades de disposición sobre la hacienda del Estado que no le estén atribuidas».

El tercer bloque de cuestiones planteadas por los recurrentes se refiere a la figura tributaria que establece la ley impugnada, ya que, al no responder a finalidades recaudatorias, no es ni puede ser un verdadero impuesto, sino que se trata más bien de una exacción o arbitrio con finalidad no fiscal que carece de cobertura constitucional como fuente de financiación propia de las Comunidades Autónomas. El Tribunal constata que «la función extrafiscal del sistema tributario estatal no aparece explícitamente reconocida en la Constitución, pero dicha función puede derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios rectores de política social y económica (arts. 40.1 y 130)», y algo similar puede predicarse del poder tributario autonómico, toda vez que «ni en la Constitución ni en la

LOFCA existe precepto alguno que prohíba a las Comunidades Autónomas actuar su potestad tributaria en relación con la consecución de objetivos no fiscales».

**Sentencia núm. 38/87, de 1 de abril (núm. Reg. 741/85), «BOE» núm. 89.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE, 46.1.b de la LOTC y 64 de la LJCA.

**Cuestiones analizadas:** Legitimación en el recurso de amparo. Necesidad de emplazamiento personal y directo.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 39/87, de 3 de abril (núm. Reg. 344/84), «BOE» núm. 89.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad limitada.

**Acto impugnado:** Sentencia de Magistratura de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 32 de la LPL.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva; requisitos del emplazamiento personal por correo.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase sentencia 36/87, de 25 de marzo, y jurisprudencia allí citada.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 40/87, de 3 de abril (núm. Reg. 786/86), «BOE» núm. 89.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 17.1 y 4 de la CE y 504 de la LECr.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la libertad personal y prisión provisional; plazo temporal de esta última.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase sentencia núm. 32/87, de 12 de marzo, y jurisprudencia allí citada.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 41/87, de 6 de abril (núm. Reg. 539/84), «BOE» núm. 107.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Instrucción.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE, 166 de la LECr y 7 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, que regula el juicio de faltas.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva; requisitos de la citación por correo; función de la citación para la vista en el juicio de faltas.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 39/87, de 3 de abril, y jurisprudencia allí citada.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 42/87, de 7 de abril (núm. Reg. 520/85), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad anónima.

**Acto impugnado:** Resolución de Gobierno Civil.

**Precepto de referencia:** Artículo 25.1 de la CE.

**Cuestión analizada:** Principio de legalidad en materia sancionatoria.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 15/81, de 7 de mayo; 77/83, de 3 de octubre; 83/84, de 24 de julio; 87/85, de 16 de julio, y 2/87, de 21 de enero.

**Comentario:**

El tema que aborda la presente sentencia es la posible lesión del artículo 25 de la Constitución por una sanción pecuniaria dictada al amparo de una Orden Ministerial de enero de 1979, aprobada en virtud de una remisión en blanco o incondicionada efectuada por un Decreto-ley de febrero de 1977.

La Sala comienza sentando, con apoyo en jurisprudencia precedente, que «el alcance de la reserva de ley establecida en el artículo 25.1 no puede ser

tan estricto en relación con la regulación de las infracciones y sanciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto, ... pero, en todo caso, aquel precepto constitucional determina la necesaria cobertura de la potestad sancionatoria de la Administración en una norma de rango legal».

Constata igualmente la Sala que «debe reputarse contraria a las mencionadas exigencias constitucionales no sólo la regulación reglamentaria de infracciones y sanciones carente de toda base legal, sino también, en el ámbito de las relaciones de sujeción general, la simple habilitación a la Administración, por norma de rango legal vacía de todo contenido material propio, para la tipificación de los ilícitos administrativos y las correspondientes consecuencias sancionadoras».

El problema, en el presente caso, se concreta así no en la doctrina general, sino en la virtualidad de una norma legal habilitante anterior a la Constitución, cuya remisión en blanco se virtualiza tras la entrada en vigor de la Constitución, ya que, como tiene declarado el Tribunal, el principio de legalidad que se traduce en la reserva de ley no incide en disposiciones nacidas al mundo del Derecho con anterioridad a la promulgación de la Constitución. Pues bien, en relación a dicho tema, la sentencia declara que «cualquiera que sea la validez y aplicabilidad de las normas preconstitucionales incompatibles con el principio de legalidad que garantiza el artículo 25.1 de la Constitución, es claro que, a partir de la entrada en vigor de la misma, toda remisión a la potestad reglamentaria para la definición de nuevas infracciones o la introducción de nuevas sanciones carece de virtualidad y eficacia».

**Sentencia núm. 43/87, de 8 de abril (núm. Reg. 96/85), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Acuerdo del Pleno del CGPJ.

**Precepto de referencia:** Artículo 43.1 de la LOTC.

**Cuestión analizada:** Agotamiento de la vía judicial previa.

**Comentario:**

En la medida en que el solicitante de amparo está siguiendo un procedimiento judicial ante los Tribunales ordinarios sobre el mismo objeto, la Sala desestima el recurso.

**Sentencia núm. 44/87, de 9 de abril (núm. Reg. 620/86), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Distrito.

**Precepto de referencia:** Artículo 24.2 de la CE.

**Cuestión analizada:** Presunción de inocencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase, por todas, sentencia núm. 47/86, de 21 de abril.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 45/87, de 9 de abril (núm. Reg. 722/86), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 44.2 de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Plazo de interposición del recurso de amparo. Necesidad de emplazamiento personal y directo.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 46/87, de 21 de abril (núm. Reg. 1147/85), «BOE» núm. 107.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad anónima.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE, 64 de la LJCA y 44.2 de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Plazo de interposición del recurso de amparo. Necesidad de emplazamiento personal y directo.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 47/87, de 22 de abril (núm. Reg. 46/86), «BOE» núm. 107.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Juzgado de Distrito.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.2 de la CE y 10.2 de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la asistencia de letrado; la asistencia letrada gratuita en los procesos en que la ley no exige la intervención de abogado; posible colisión con el Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 28/81, de 23 de julio, y 30/81, de 24 de julio.

**Comentario:**

Sentencia que aborda las cuestiones precedentemente indicadas en relación al juicio de desahucio y con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde, como es bien sabido, el tema ha dado lugar a importantes sentencias (9 de octubre de 1979, caso Airey, y 25 de abril de 1983, caso Pakelli). La Sala, tras depurar doctrinalmente el tema (\*), atendiendo a las circunstancias del caso, desestima el recurso.

**Sentencia núm. 48/87, de 22 de abril (núm. Reg. 54/86), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14 de la CE y 240 del CP.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley; el delito de desacato cuando el inculpado también es autoridad pública.

---

(\*) «El hecho de poder comparecer personalmente ante un juez o Tribunal no es causa que haga decaer ese derecho de asistencia letrada, pues el cumplimiento de los presupuestos de validez de los actos procesales no basta necesariamente para satisfacer las exigencias de un derecho fundamental garantizado por la Constitución ... No debe, sin embargo, entenderse en el sentido absoluto de que la persona carente de medios económicos que es demandada en un proceso exceptuado de la intervención preceptiva de letrado tenga, en todo caso y sin más matización, derecho a la asistencia letrada gratuita.»

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 49/87, de 23 de abril (núm. Reg. 157/85), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad anónima.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 1718.1 de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y doble instancia.

**Comentario:**

Carece de interés doctrinal.

**Sentencia núm. 50/87, de 23 de abril (núm. Reg. 1067/85), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díez Picazo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 44.1.a y 50.1.b de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Falta de agotamiento de los recursos utilizables en la vía judicial previa; el recurso de revisión como posible recurso; el recurso de súplica como posible recurso.

**Comentario:**

Carece de interés doctrinal.

